



Rama Judicial del Poder Público

JUZGADO CINCUENTA Y UNO (51) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D. C.

Bogotá D. C., 18 ENE. 2022

Expediente: Ejecutivo Singular
Radicación: 11001 40 03 051 2018 01034 00
Accionante: **BANCO FINANDINA SA**
Accionadas: **ÁNGEL ALEXÁNDER VILLAMIZAR**

Surtido el trámite legal, se profiere sentencia anticipada en el presente asunto, conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 278 de la Ley 1564 de 2012.

ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción cambiaria directa, y por medio de procurador judicial, la entidad demandante imploró adelantar ejecución singular en contra del ciudadano **ÁNGEL ALEXÁNDER VILLAMIZAR**, por las obligaciones dinerarias insolutas, incorporadas como derecho de crédito al pagaré N° 1150324822, equivalentes a \$36.000.000 por concepto de capital y \$2.209.155,65 por concepto de intereses corrientes, conjuntado a los intereses moratorios causados desde el día siguiente a su vencimiento el pasado 15 de agosto de 2018, data en la cual se aceleró o extinguió el plazo de pago. .

ACTUACIÓN DE LA INSTANCIA

1. El mandamiento de pago exorado se libró en auto del 11 de septiembre de 2018 (fl. 13, cdno. 1), cual se puso en conocimiento del curador *ad litem* del demandado, quién se notificó personalmente y en su nombre el 25 de enero de 2021 (fl. 97, ib) y se trasladó legalmente la demanda y sus anexos.

2. Tempestivamente, el curador *ad litem* del demandado propuso como excepción la prescripción de la acción cambiaria, arguyendo que el vencimiento del pagaré acaeció el 14 de agosto de 2018, en tanto la demanda se admitió el

11 de septiembre de 2018 y esa decisión se notificó el día siguiente (12 de septiembre de 2018) sin embargo, sólo hasta el 2 de febrero de 2021 se notificó al demandado, completándose el plazo legalmente señalado en el artículo 789 del Código de Comercio para la configuración del fenómeno extintivo y liberatorio de la obligación.

3. Por auto del 5 de abril de 2021 (fl. 100, cdno. 1) se trasladó el escrito de escrito de excepciones al demandante por el plazo de 5 días, quién aprovechó la oportunidad para oponerse a la excepción propuesta (fls. 101 a 103, ib).

A la postre, a través de auto adiado 4 de mayo de 2021 (fl. 109, cdno. 1), con apoyo en el numeral 2 del artículo 278 del CG del P, se ordenó fijar en lista el expediente (art. 120, ib), para ser decidida por sentencia anticipada, en medida que no debía practicarse pruebas.

CONSIDERACIONES

1. Los denominados presupuestos procesales que acuñó Von Bülow en 1.868 dentro de su *Teoría de la Relación Jurídica*, y refinó para Colombia la Corte Suprema de Justicia desde 1.936 a 1.968¹, se encuentran cabalmente reunidos. Asimismo, tras la revisión del discurrir procesal por ésta Judicatura, no se encuentra configurada causa de nulidad procedimental que obligue retrotraer lo actuado o, conforme al deber oficioso de legalidad, rehacer una actuación o acto procesal ya surtido, habilitándose la presente decisión.

2. A más de lo anterior, se anota, el estándar de prueba para ésta clase de procesos es alto, en lo que toca la carga *subjetiva* del demandado sin perjuicio del *principio de adquisición procesal*, pues, de entrada, el Despacho auscultó la concurrencia de los tres elementos necesarios para emitir una orden de apremio: (i) una manifestación del demandante tendiente a indicar que existe una obligación en cabeza del demandado; (ii) un título ejecutivo que permita evidenciar tal obligación; y, (iii) una negación indefinida dirigida a indicar que la obligación se encuentra insoluta.

De tal manera, se cumple la carga *subjetiva* de prueba en el demandante², tal y como lo pregonan los artículos 167 de la Ley 1564 de 2012 y 1757 del Código Civil; a consecuencia, y como lo dice un antiquísimo aforismo, *reus in excipiendo*

¹ CSJ, Sala de Casación Civil., sentencia del 15 de julio de 2.008, exp. 2002-00196-01.

² LESSONA, Carlo. *Teoría general de la prueba en Derecho Civil*, Parte General, Trad. de Enrique Aguilera de Paz, Madrid 1928, págs. 118 y sigs.

fit actor, que traduce, en la excepción el demandado funge como el demandante, implicando que es su carga satisfacer, en la epistemología probatoria y jurídica, la extinción de la obligación o su inexigibilidad, entre otras causas.

3. Dicho lo anterior, cumple decir que la excepción planteada será declarada impróspera, por razón de lo siguiente:

3.1. Si bien la prescripción es un modo de extinguir las obligaciones (num. 10, art. 1625, CC), lo cierto es que su estructuración requiere el transcurrir pasivo del tiempo, en la forma que el legislador determina. Sobre tal particular, ya de vieja data la doctrina judicial, como en la sentencia de 17 de febrero de 2.010, emanada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del Magistrado Luis Roberto Suarez, dentro el proceso ejecutivo 2002-0491-02, ha sido clara en precisar:

«Varias son las instituciones jurídicas que descansan en el transcurso del tiempo, dentro de las que importa destacar el fenómeno de la prescripción que, en materia cambiaria, tiene el poder de extinguir las obligaciones de los intervinientes en el título valor y opera por el inejercicio oportuno de las acciones que la ley le otorga al titular del derecho, mecanismo de carácter objetivo que se hace valer por vía de excepción, con la advertencia que esta, en todos los casos, debe ser alegada por el interesado.

Igualmente es necesario recordar que el término de prescripción de la acción directa derivada del pagaré es de tres años, contados a partir de la fecha de vencimiento de la obligación, el cual puede presentarse de variada manera, dependiendo de la forma pactada, pues si se convino la modalidad de los periodos ciertos y sucesivos, el lapso de prescripción de cada cuota corre de manera individual, a menos que a la par se hubiere ajustado un pacto aceleratorio, en virtud del cual se habilite al acreedor para que declare vencido el plazo y reclame la totalidad del crédito insoluto, ante la presencia de algunas de las precisas causas igualmente acordadas por los negociantes»

Y es que, ciertamente, el artículo 789 del Código de Comercio consagra que “La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento”, que, en éste caso, se hizo constar a día cierto (num. 2, art. 673 y num. 4, art. 709, C.Cio); el 14 de agosto de 2018.

3.2. Se sabe, el cómputo de plazos y términos en materia comercial está regido por el artículo 829 del Código de Comercio, que a la letra señala:

«En los plazos de horas, días, meses y años, se seguirán las reglas que a continuación se expresan:

1) Cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo de la hora siguiente, y se extenderá hasta el último segundo de la última hora inclusive;

2) Cuando el plazo sea de días, se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya celebrado, salvo que de la intención expresa de las partes se desprenda otra cosa, y

3) Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día siguiente. El día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde.

PARÁGRAFO 1o. Los plazos de días señalados en la ley se entenderán hábiles; los convencionales, comunes.

PARÁGRAFO 2o. Los plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las partes, con anterioridad al vencimiento del término, se entenderán como prórroga del mismo»

De significancia, la medición del tiempo en Colombia, como en la mayoría de los países del mundo, se hace a través del Calendario Gregoriano establecido el 24 de febrero de 1582³, previsto a través de la bula papal *Inter Gravissimas*, y posteriormente explicado de manera detallada a través del libro *Romanii calendarii a Gregori XIII a restituti explicatio*⁴.

Dicho calendario, en lo esencial, divide el cómputo del tiempo en segundos, horas, días, meses, años y siglos. Por su parte, la mayoría de legislaciones del mundo disponen el cómputo de los plazos en horas, en días, en meses o en años, entendiendo por año el lapso de tiempo que dura la tierra en orbitar el sol; por mes, el lapso de tiempo que dura la luna orbitando la tierra; por día, el espacio de tiempo que transcurre entre la salida y puesta del sol, y por hora, cada una de las 24 partes de igual duración en que se divide el día, subdividida cada una de ellas en 60 minutos⁵.

Pero la aplicación del Calendario Gregoriano no es el único parámetro a tener en cuenta para el cómputo del tiempo, pues el país debe seguir reglas internacionales incorporadas a nuestra legislación mediante los decretos 3464 de 1980 y 2707 de 1982⁶, en virtud de los cuales Colombia adoptó como "hora

³ En el año 1583 las colonias americanas de España adoptaron el Calendario Gregoriano, para lo cual después del viernes 4 de octubre vino el sábado 15 de octubre. R. MORA MAGARIÑOS, *Calendarios Gregoriano, mundial y fijos*, montevideo, 1975, p. 23. Sobre la aplicación en Colombia del Calendario Gregoriano cfr. CE, Sala Plena, sentencia de marzo 2 de 1926, C.P.: Fernando Restrepo Briceño, actor: Luis Carlos Irarorri Peña, demandado: Camilo A. Falla, y CE, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de diciembre 15 de 2005, exp. 11001-03-06-000-2005-01701-00 (1701), C.P.: Enrique Arboleda Perdomo.

⁴ Dicho calendario modificó y ajustó el Calendario juliano que se venía aplicando desde la época de Julio César. Para un mayor análisis sobre el alcance y contenido del calendario Gregoriano, cfr. C. DE TORO Y LLACA, *El calendario actual en Occidente y sus orígenes*, Madrid, instituto de Astronomía y Geodesia, Universidad Complutense de Madrid, disponible en http://www.lag.csic.es/museo/docs/calendario_origenes.pdf.

⁵ A. ALESSANDRI, M. SOMARRIVA y A. VODANOVIC, *Tratado de Derecho Civil, Partes General y Preliminar*, t. II, Santiago, jurídica de Chile, 1998, p. 146.

⁶ Sobre la aplicación en Colombia del Sistema internacional de medidas y unidades, cfr. Ley 33 de 1905, decreto 1731 de 1967, decreto 2416 de 1971, decreto-Ley 149 de 1976, decreto 2269 de 1993, resolución 1823 de 1991 de la SIC, resolución 005 de 1995 del Consejo Nacional de Normas y Calidades (ISO-1000 y NTC-1000) y la Ley 1514 de 2012.

legal en el territorio de la República, la del Tiempo Universal Coordinado, UTC, disminuido en 5 horas"⁷. A su vez, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153 de 1992 y el numeral 19 del artículo 9 del decreto 3523 de 2009, corresponde al Superintendente delegado para la Protección del Consumidor y Metrología de la Superintendencia de industria y Comercio (SIC) "[m]antener, coordinar y difundir la hora legal de la República".

Así entonces, en el caso colombiano, el cómputo de los plazos fijados en horas, días, meses o años de que se haga mención legal⁸ o que se pacten en los negocios que se celebren⁹ se debe realizar de acuerdo con el sistema de cómputo civil, de tal suerte que los mismos siempre y en todos los casos deben contarse "de medianoche a medianoche"¹⁰, si se trata de plazos fijados en días, meses o años y "hasta el último minuto de la última hora inclusive", si se trata de horas, pues estos plazos deben contabilizarse de manera completa prescindiendo de las fracciones, salvo que la ley expresamente disponga un cómputo distinto, según las vicisitudes legales o contractuales.

3.3. En línea con lo anterior, el plazo fijado por el legislador mercantil para que opere la prescripción extintiva del derecho incorporado a un título valor (acción cambiaria directa) debe tomarse, para el presente caso, desde la media noche del 14 de agosto de 2018 hasta la media noche del 13 de agosto de 2021, completando así tres años (art. 789, C.Cio).

Ahora bien, como puede verificarse en el informativo, el curador *ad litem* del demandado se notificó personalmente del mandamiento ejecutivo el 25 de enero de 2021, lográndose, *ab initio*, interrumpir la alegada prescripción extintiva.

Y es que, debe apuntarse, el artículo 94 del Código General del Proceso (L. 1564/12), vigente desde el 1 de octubre de 2012 (art. 627, num. 4), establece:

⁷ El Tiempo Universal Coordinado (UTC) es el tiempo de la zona horaria de referencia respecto a la cual se calculan todas las otras zonas del mundo. El 1.º de enero de 1972 pasó a ser el sucesor del GMT (*Greenwich Meridian Time*: tiempo promedio del Observatorio de Greenwich, en Londres), aunque todavía coloquialmente se le denomina así. La nueva denominación fue acuñada para eliminar la inclusión de una ubicación específica en un estándar internacional, así como para basar la medida del tiempo en los estándares atómicos, más que en los celestes. A diferencia del GMT, el UTC no se define por el sol o las estrellas, sino que se mide por los relojes atómicos, debido a que la rotación de la Tierra es estable pero no constante y se retrasa con respecto al tiempo atómico, UTC se sincroniza con el día y la noche de UT1, al que se le añade o quita un segundo intercalar (*leap second*) tanto a finales de junio como de diciembre, cuando resulta necesario. La puesta en circulación de los segundos intercalares se determina por el Servicio internacional de Rotación de la Tierra, con base en sus medidas de la rotación de la Tierra. Cfr. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, *Reglamentos Aeronáuticos de Colombia*, Apéndice d, Parte decimotercera, p. 20. Cfr. resolución 01313 de marzo 26 de 2007. Cfr. Pan American Institute of Geography and History, *Glosario de Términos Geodésicos*, El instituto, 1977, p. 103; A. JOUETTE, *El secreto de los números*, Albin mitchel, 2008, p. 198. Cfr. Superintendencia de industria y Comercio-SIC, concepto 02065227 de julio 31 de 2002; Procuraduría General de la Nación, directiva 0013 de octubre 6 de 2005.

⁸ Código Civil, artículos 67, 68 y 70; Ley 4 de 1913, artículos 59 a 62.

⁹ Código de Comercio, art. 829.

¹⁰ CSJ, Sala de Casación Civil, sentencia de marzo 28 de 1996, exp. 4665, M.P.: Rafael Romero Sierra.

«La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado (...).» -Se resalta-

Tal modo de interrupción en éste caso, dado que la demanda se presentó el 28 de agosto de 2018, como lo deja ver el acta individual de reparto N° 96721 (fl. 11, cdno. 1), sólo se alcanzó cuando el mandamiento ejecutivo se notificó al curador *ad litem* del demandado hasta el 25 de enero de 2021, aun cuando por estado N° 80 del 12 de septiembre de 2018, le fue puesto en conocimiento al demandante.

Sin embargo, y como salta a la vista, el plazo de tres (3) años para la configuración de la extinción de la obligación por prescripción no se consumó, como que, la interrupción civil en comento se logró el 25 de enero de 2021, esto es, antes de llegarse el 13 de agosto de 2021, cuando efectivamente se materializaría.

4. Así entonces, y como corolario, la excepción propuesta se muestra impróspera, y debe desestimarse, por lo cual, y de contera, condenarse en costas del proceso, atendiendo la previsión del artículo 361 y el numeral 1° del artículo 365, ambos, del C.G del P, en consonancia con el párrafo primero del literal B, numeral 4° del artículo 5° del Acuerdo PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con un siete (7%) del valor de la suma determinada como debida.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Cincuenta y Uno (51) Civil Municipal de Bogotá D. C.**, en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR impróspera la excepción propuesta por el extremo pasivo.

SEGUNDO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución en los términos señalados en el mandamiento ejecutivo.

TERCERO: ORDENAR a las partes, por conducto de sus apoderados o curadores *ad litem*, presentar la liquidación del crédito, atendiendo las previsiones del artículo 446 del CG del P.

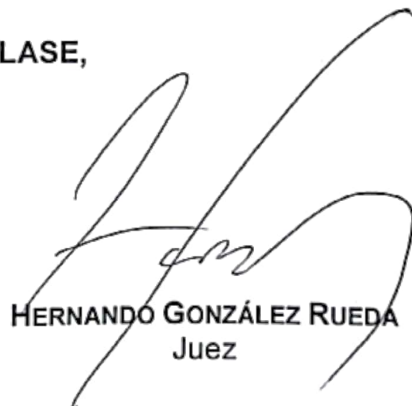
CUARTO: ORDENAR el avalúo de los bienes cautelados a los demandados, en la forma establecida por el artículo 444 del CG del P, y rematarlos, para con su producto saldar el crédito y las costas liquidadas.

QUINTO: De existir dineros cautelados a los demandados, entréguese al demandante, hasta la concurrencia del crédito y las costas liquidadas y aprobadas, siempre que no existan cautelas concurrentes por créditos con prelación o privilegio.

SEXTO: CONDENAR en costas a los demandados. Al efecto, téngase como agencias en derecho la suma de \$ 2.500.000. **Liquidense** por Secretaria.

SÉPTIMO: Cumplida la liquidación de costas, **remítase** el expediente ante los Jueces Civiles Municipales para la Ejecución de Sentencias de Bogotá – Reparto. **Ofíciase**.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



HERNANDO GONZÁLEZ RUEDA
Juez

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
Juzgado Cuarta y Uno Civil Municipal Bogotá, D.C.

EL AUTO ANTERIOR SE NOTIFICO POR ESTADO

No. 003 DE HOY 19 ENE. 2022

DE 20 22

El Secretario, [Firma]